



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: MARLENY DEL SOCORRO GRANADA RINCÓN
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES; y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 017 2019 00603 01
Sentencia: S-072

AUTO

Se accede a la sustitución de poder presentada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. SANTIAGO MUÑOZ MEDINA, a favor del Dr. DARÍO MAURICIO TOBÓN CHAMORRO, quien se identifica con T.P. N° 271.442 del C. S. de la Judicatura; en consecuencia, se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal.

De otro lado, en atención a la escritura pública 885 del 28 de agosto de 2020 allegada al expediente, así como la inscripción en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial de PORVENIR S.A. al Dr. ESTEBAN OCHOA GONZÁLEZ, T.P. 331.096 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA

PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta última en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el día 19 de junio de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

MARLENY DEL SOCORRO GRANADA RINCÓN demandó a PORVENIR S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto no se le proporcionó una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos de la ley 797 de 2003, los perjuicios materiales causados por PORVENIR S.A. y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 4 de septiembre de 1961; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 19 de abril de 1982; que cotizó a esa entidad hasta el 30 de junio de 1999 acumulando un total de 529.86 semanas; que el 01 de julio de ese año se trasladó al Régimen de Ahorro Individual

administrado por la AFP PORVENIR S.A.; que en ese momento la entregaron una información generalizada, pero sin advertirle nada acerca del saldo requerido para alcanzar una pensión de vejez en ese régimen, o situaciones adicionales como el concepto de bonos pensionales y los detalles para disfrutar de una pensión anticipada de vejez; que tampoco le informaron nada acerca de las consecuencias legales y económicas que tendría con esa decisión de traslado de régimen, ni se le realizó un estudio previo y detallado de su situación pensional; que cotizó hasta el 10 de diciembre de 2018 y tiene acumuladas un total de 1496 semanas en toda su vida laboral; y que los 57 años de edad que exige la ley 797 de 2003, los tiene acreditados desde el 4 de septiembre de 2018.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta únicamente lo relacionado con el traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual, indicando frente a los demás hechos que no le constan por tratarse de afirmaciones frente a un tercero ajeno a su entorno y por ende deben ser probadas dentro del proceso. Se opuso a las pretensiones en tanto la demandante se encuentra válidamente afiliada al RAIS, además de que ya perdió la posibilidad de retornar en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la ley 797 de 2003. Como excepciones propuso improcedencia de la declaración de la nulidad del traslado de régimen, ausencia de vicios del consentimiento, inexistencia de precedente judicial aplicable al caso, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

PORVENIR S.A. a su turno, acepta únicamente lo relacionado con la afiliación de la demandante a esa entidad, pero aclara que ese hecho ocurrió con la suscripción del formulario a la AFP COLPATRIA S.A. el 4 de junio de 1999, el cual se efectuó en cumplimiento de las obligaciones vigentes para esa época, efectuándose la debida asesoría. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda

insistiendo en el hecho de haber cumplido con todos los requisitos de ley al momento de la afiliación de la demandante. Como excepciones propuso prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 19 de junio de 2020, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por la AFP PORVENIR S.A.; ii) ORDENÓ a PORVENIR S.A. trasladar a COLPENSIONES los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo rendimientos financieros y aportes destinados a la garantía de pensión mínima; iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación de la demandante al RPMPD, y reconocer y pagar la pensión de vejez desde el 01 de diciembre de 2018, cuya liquidación debe realizar la entidad conforme al artículo 21 de la ley 100 de 1993 y aplicando los respectivos descuentos al Sistema de Salud; iv) ABSOLVIÓ a PORVENIR de la pretensión de perjuicios materiales; y v) CONDENÓ en costas a PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$1`800.000.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, la apoderada de COLPENSIONES interpuso recurso de apelación solicitando se modifique la decisión en lo referente al traslado de los recursos de la cuenta individual del demandante, con base en el principio de estabilidad financiera estipulado en el artículo 334 de la Constitución Nacional, modificado por el artículo 1 del acto legislativo 03 de 2011, ya que se debe ordenar al fondo privado que se traslade la totalidad de los valores recibidos junto a las cuotas de administración, reaseguros o seguros provisionales y los rendimientos financieros con todos sus frutos e

intereses, los cuales deben de ser indexados, puesto que estos dineros se han causado producto del trabajo de la demandante y que deben ser asumidos por el fondo privado con cargo a sus propios recursos, conforme a lo dispuesto en los precedentes judiciales de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en sentencias 4969/18, SL 4989/18, SL 1421/19, SL 1688/19 y SL 3463/19.

La apoderada de PORVENIR S.A. por su parte, solicita se revoque la sentencia en lo concerniente a declarar la ineficacia de la afiliación, así como la condena a hacer la efectiva devolución de los saldos a favor de COLPENSIONES y en lo referente a las costas del proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó sus alegatos de conclusión indicando que, tal y como se pudo verificar en audiencia, los fondos privados de pensiones le brindaron a la demandante una plena información a la hora de realizar el traslado de régimen, dando cumplimiento a su deber de información y llevando a que voluntariamente se suscribiera el respectivo formulario. Agrega que las normas laborales establecen unos requisitos para el traslado de régimen, y prohíbe expresamente el mismo cuando a la persona le falten 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, conforme al artículo 2º de la Ley 797 de 2003, lo que impide a la demandante retornar al Régimen de Prima Media. De mantenerse la decisión de primera instancia, solicita se tenga en cuenta que en el Régimen de Ahorro Individual se gravan los aportes de los afiliados con un porcentaje de administración que no existe el Régimen de Prima Media, por lo que, según se advierte en las sentencias SL del 8 septiembre de 2008, rad. 31989, SL 17595-2017, SL 4989-2018 y SL1421-2019, hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, es decir: i) los recursos de la cuenta individual del afiliado, ii) las cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, iii) los rendimientos, y iv) los porcentajes destinados al pago

de Seguros Previsionales y gastos de administración, todo lo cual se debe devolver de manera indexada.

PORVENIR S.A. por su parte, sostiene que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley. Asegura que al momento de realizar el traslado cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues le entregó a la parte actora la información del Régimen en diferentes momentos, esto es, de manera verbal en una reunión general y colectiva, y de forma personal al momento de suscribir el Formulario de Afiliación. Agrega que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación, son obligaciones posteriores, surgidas a partir de los años 2010 y 2014. En caso de dejar en firme la decisión de declarar la ineficacia de la afiliación, solicita se confirme la excepción de traslado de los dineros descontados por gastos de administración decretada en el numeral cuarto de la sentencia, ya que son sumas que tienen por mandato legal una destinación específica que se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por las apoderadas de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES a través del recurso de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de ésta última -en los temas restantes- con el objeto de salvaguardar sus intereses, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la señora MARLENY DEL SOCORRO GRANADA RINCÓN realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que la AFP

queda en la obligación de trasladar. Igualmente, se examinará lo atinente al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** MARLENY DEL SOCORRO GRANADA RINCÓN nació el 4 de septiembre de 1961 (fl. 22); **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 19 de abril de 1982, acumulando en esa entidad un total de 526.86 semanas (f. 29); y **iii)** el 4 de junio de 1999 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la entonces AFP COLPATRIA S.A., hoy PORVENIR S.A., entidad en la que se encuentra afiliada actualmente (f. 96).

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es la declaratoria de ineficacia de su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual ocurrido en el año 1999 cuando decidió afiliarse a la entonces AFP COLPATRIA S.A., alegando que en aquella época no le fue suministrada la información necesaria para adoptar una decisión de esas características. En consecuencia, solicita se declare ineficaz su traslado; se le permita retornar como afiliada a COLPENSIONES; y se le reconozca la pensión de vejez por acreditar más de 57 años de edad y más de 1300 semanas de cotización.

1. Ineficacia de traslado.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las

administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y

completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero, el cual incluye los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*"Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que***

soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...]."

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

2. Cuotas de administración.

De otro lado, en cuanto a la decisión del a quo de ordenar el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros y aportes destinados a la garantía de pensión mínima, dejando por fuera lo relacionado con las cuotas de administración y los seguros previsionales, tema que se revisará según el recurso de apelación planteado por COLPENSIONES, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a las AFPs correspondientes, que procedan con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad.

68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque

llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, la decisión deberá ser MODIFICADA en el sentido de ordenarle a la AFP PORVENIR S.A. que proceda igualmente con el traslado de las cuotas de administración recibidas durante el tiempo que la señora MARLENY DEL SOCORRO GRANADA RINCÓN estuvo vinculada a esa entidad, incluyendo además las sumas adicionales de las aseguradoras, comisiones y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima.

Se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, debe incluir la respectiva indexación, según la ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y según se solicita por COLPENSIONES, tanto en el recurso de apelación, como en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia.

3. Pensión de vejez.

Finalmente, no existe duda alguna en cuanto a que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, la demandante acredita todos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, pues al haber nacido el 4 de septiembre de 1961, significa que los 57 años de edad los tiene acreditados desde el mismo día y mes del año 2018. De otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones que fuera aportado por la demandada PORVENIR S.A. a fls. 113, se evidencia que la actora acredita un total de 992 semanas cotizadas a esa entidad, mientras

que al entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES había realizado aportes por 526.55 semanas, según se aprecia en las historias laborales visibles en los folios 30 y 54, para un total de cotizaciones en toda su vida laboral de 1518.55 que sin duda resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal.

Ahora en lo que tiene que ver con el momento a partir del cual fue ordenado el pago de la pensión de vejez -01 de diciembre de 2018-, advierte la Sala que la fecha de causación se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049/90, puesto que conforme a la historia laboral obrante en el expediente, específicamente a folio 106 y 114, que corresponde a un reporte expedido por la propia AFP PORVENIR S.A. el 17 de diciembre de 2019, se observa que la demandante realizó cotizaciones hasta el mes de noviembre de 2018 cuando laboraba para la empresa PERMOFIELTROS LTDA, del que se extrae igualmente que para los meses posteriores a esa fecha, no se realizaron más aportes al sistema de pensiones, lo que se corrobora además con lo informado por la propia señora MARLENY DEL SOCORRO en el interrogatorio de parte realizado, en el que explicó que dejó de realizar cotizaciones desde ese entonces, por el hecho de tener un número de semanas superior al que exige la ley.

Por lo tanto, se confirmará la decisión de primera instancia, en lo relacionado con el reconocimiento de la pensión de vejez a la demandante y el momento de causación de la prestación reconocida a partir del 01 de diciembre de 2018.

4. Condena en costas a cargo de PORVENIR S.A.

Otro tema que cuestiona la apoderada de PORVENIR S.A. a través de su recurso de apelación, tiene que ver con la condena en costas impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea la recurrente, basta con señalar que el artículo 365 del Código General

del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se CONDENARÁ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso PORVENIR presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales. Se mantendrá en consecuencia la condena impuesta por este concepto.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el día 19 de junio de 2020, pero **La MODIFICA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROVENIR S.A. que también proceda a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, el valor recibido por concepto de cuotas de administración durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad, incluyendo los porcentajes de seguros y reaseguros y comisiones, con la debida indexación.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 066
del 21 de abril de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **197a74c88c89181fef4b8305b905d3ae01879fa44e03f09acc85035ab775c534**

Documento generado en 20/04/2021 01:40:03 PM